



Asamblea General

Distr. general
24 de febrero de 2012
Español
Original: inglés

**Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria en su 60º período de sesiones
(2 a 6 de mayo de 2011)**

Nº 1/2011 (República Árabe Siria)

Comunicación dirigida al Gobierno el 17 de diciembre de 2010

**Relativa a: Mohamed Ahmed Mustafa, Hassan Ibrahim Saleh
y Maarouf Ahmad Malla Ahmad**

El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue aclarado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010.
2. El Grupo de Trabajo, de conformidad con sus métodos de trabajo, transmitió una comunicación al Gobierno el 17 de diciembre de 2010, y lamenta que este no le haya proporcionado la información solicitada.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
 - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
 - b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, además, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
 - c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los

Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. El caso se ha comunicado al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la siguiente forma: Mohamed Ahmed Mustafa, de 48 años de edad, casado y con un hijo, con residencia habitual en Kadour Bek, en Al-Qamishli, es políticamente activo y ejerce la abogacía en Al-Hassaka.

5. Hassan Ibrahim Saleh, de 62 de edad, casado y con ocho hijos, tiene su residencia habitual en Massaken Al-Moalemen, en el barrio de Corniche, en la calle Khalij de Al-Qamishli.

6. Maarouf Ahmad Malla Ahmad, de 56 años de edad, casado y con hijos, tiene su residencia habitual en Kadour Bek, en Al-Qamishli.

7. Los Sres. Mustafa, Saleh y Malla Ahmad son miembros del grupo de oposición política kurdo y dirigentes del partido político "Yeketi", muy conocido por sus actividades de defensa de la minoría kurda y de sus reivindicaciones culturales.

8. El 26 de diciembre de 2009, los Sres. Mustafa, Saleh y Malla Ahmad fueron detenidos cuando se dirigían a la comisaría central de policía de Al-Qamishli, donde habían sido citados por su Director General, y llevados a la sección "Al-Hassaka" de los servicios de seguridad política.

9. Desde el 26 de diciembre de 2009 hasta el 2 de enero de 2010, los Sres. Mustafa, Saleh y Malla Ahmad permanecieron detenidos en régimen de aislamiento. Desde el 2 de enero de 2010 han permanecido reclusos en la unidad "Al-Fayhaa", perteneciente a los servicios de seguridad política de Damasco.

10. Según la información recibida, los Sres. Mustafa, Saleh y Malla Ahmad permanecieron detenidos durante más de cinco meses en un lugar no revelado y privados de cualquier contacto con el exterior y con sus familias. Tuvieron que esperar hasta el 6 de junio de 2010 para ser llevados ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado de Damasco. Esta fue también la primera vez que las familias respectivas fueron informadas de su suerte y paradero. En esta ocasión, se les informó de que los Sres. Mustafa, Saleh y Malla Ahmad estaban acusados de un delito de "intento de secesión" con arreglo al artículo 267 del Código Penal de Siria. El 20 de julio de 2010, las personas mencionadas fueron llevadas ante el mismo Tribunal para una nueva vista. En el momento de enviar la presente comunicación, todavía no se había dictado sentencia.

11. Ni sus familias ni su abogado están autorizados para visitar a los Sres. Mustafa, Saleh y Malla Ahmad en el centro de detención. Temen que, al estar reclusos en régimen de aislamiento, estos puedan ser sometidos a tortura o a otros malos tratos.

12. La fuente informa al Grupo de Trabajo de que, entre el 29 de diciembre de 2009 y el 6 de junio de 2010, los Sres. Mustafa, Saleh y Malla Ahmad permanecieron detenidos en un lugar no revelado, sin ningún fundamento jurídico y sin posibilidad de contactar con el exterior. Según la fuente, este prolongado período de detención antes de la primera comparecencia ante el tribunal no está en consonancia con la legislación interna de la República Árabe Siria ni con los principios fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

13. La fuente alega que la detención de los Sres. Mustafa, Saleh y Malla Ahmad se basa exclusivamente en sus actividades políticas pacíficas y en la pretensión de las autoridades sirias de dificultar todas las formas de oposición y libertad de expresión en el país. Al parecer, la única razón por la que los servicios de seguridad los emplazaron fue la celebración, el 3 de diciembre de 2009, de una conferencia cuyo objetivo era debatir pacíficamente la situación de la minoría kurda en la República Árabe Siria. Por tanto, según la fuente, el trato dispensado a los Sres. Mustafa, Saleh y Malla Ahmad vulnera las obligaciones contraídas por la República Árabe Siria en virtud del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

14. Asimismo la fuente sostiene que la detención continuada de dichas personas contraviene el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En particular, el artículo 9, párrafo 2, del Pacto establece que "toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella". Al parecer, los Sres. Mustafa, Saleh y Malla Ahmad no han sido informados de dichas razones, ni en el momento de la detención ni después. Por el contrario, fueron reclusos en un lugar no revelado durante varios meses. Según la información recibida, durante el tiempo en que permanecieron detenidos en ese lugar, no tuvieron posibilidad de obtener asistencia jurídica ni de impugnar la legalidad de su detención, tal y como dispone el artículo 9, párrafo 4, del Pacto. A pesar de que el 6 de junio de 2010 fueron llevados ante un juez, los Sres. Mustafa, Saleh y Malla Ahmad continúan hasta la fecha detenidos y han sido privados de todo contacto con el exterior, incluidos sus familiares y su abogado, Sabri Mirza, quien fue contratado por sus familias.

15. La fuente alega que se ha impedido a los Sres. Mustafa, Saleh y Malla Ahmad impugnar la legalidad de su detención y reclusión. Según la fuente, no se ha observado ninguna garantía mínima de un juicio imparcial. A este respecto, la fuente informa al Grupo de Trabajo de que, cuando las personas mencionadas fueron llevadas ante un juez del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, se les denegó su derecho a reunirse y a consultar con su abogado. Según la fuente, se les impidió acceder a "los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección", tal y como establece el artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto.

16. La fuente se refiere a la Observación general Nº 32 (2007) del Comité de Derechos Humanos sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia (CCPR/C/GC/32), en la que el Comité aclara que "las disposiciones del artículo 14 se aplican a todos los tribunales y cortes de justicia [...], sean ordinarios o especializados, civiles o militares" (párr. 22). En la observación general también se puntualiza que el Pacto exige que los "juicios [...] deben desarrollarse en condiciones que permitan la plena aplicación de las garantías previstas en el artículo 14, sin que dichas garantías puedan limitarse o sean modificadas por la índole militar o especial del tribunal de que se trate". El Comité de Derechos Humanos también señala que "es importante que se tomen todas las medidas posibles para velar por que tales juicios se desarrollen en condiciones en que puedan observarse plenamente las garantías estipuladas en el artículo 14". Según la información recibida, durante el juicio ante el Tribunal Supremo de Seguridad del Estado y debido a la negativa de la fiscalía, la defensa no obtuvo autorización para intervenir. Al parecer, los únicos elementos que el Tribunal podía tener en cuenta eran

las actas literales de los interrogatorios realizados por los servicios especiales, que eran los mismos servicios responsables de la reclusión en un lugar no revelado de los Sres. Mustafa, Saleh y Malla Ahmad.

17. Con ocasión del examen del informe inicial de la República Árabe Siria, el Comité contra la Tortura señaló en sus observaciones finales (CAT/C/SYR/CO/1), aprobadas el 12 de mayo de 2010, que "está profundamente preocupado por las numerosas, continuas y concordantes alegaciones de uso frecuente de la tortura por los agentes del orden o los funcionarios encargados de la investigación [...], en particular en los centros de detención. También está preocupado por las informaciones fidedignas según las cuales esos actos se cometen generalmente antes de la inculpación oficial, así como durante el período de prisión preventiva, cuando el detenido está privado de garantías procesales fundamentales, en particular el acceso a la asistencia letrada [...]. El Comité también está gravemente preocupado por el hecho de que no se lleve un registro sistemático de todos los detenidos en los lugares de detención que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado parte" (párr. 7). Según la fuente, las supuestas violaciones del artículo 9, párrafos 1 a 4, así como del artículo 14, párrafos 1 y 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos revisten tal gravedad que constituyen una detención arbitraria.

Respuesta del Gobierno

18. El Presidente del Grupo de Trabajo remitió la comunicación al Gobierno el 17 de diciembre de 2010 para obtener la información solicitada. El Grupo de Trabajo lamenta no haber recibido ninguna respuesta del Gobierno en el plazo de 90 días estipulado en el párrafo 15 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo. El Gobierno tampoco ha solicitado una ampliación del plazo para responder conforme a lo dispuesto en los párrafos 15 y 16 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo.

Deliberaciones

19. De conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo está en condiciones de emitir una opinión sobre el caso en vista de las denuncias presentadas, pese a que el Gobierno no ha proporcionado su versión de los hechos ni ha explicado las circunstancias del caso.

20. El Grupo de Trabajo señala que el Gobierno no ha respondido a su comunicación, algo que le preocupa habida cuenta del número y la gravedad de las violaciones referidas por la fuente, a saber: la detención en un lugar no revelado y sin contacto alguno con el exterior ni con abogados o familiares; la falta de notificación de las acusaciones en el momento de la detención o tras un plazo de tiempo razonable; la ausencia de un juicio imparcial; y el hecho de que la detención de los Sres. Mustafa, Saleh y Malla Ahmad, quienes son miembros de la oposición política en la República Árabe Siria, se deba a la expresión de ideas y opiniones y la celebración de manifestaciones de forma pacífica.

21. En lo que respecta a la detención en un lugar no revelado, el Grupo de Trabajo reiteró en su informe anual presentado al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2010 que dicha forma de detención "es irreconciliablemente incompatible con las normas internacionales de derechos humanos, incluso en situaciones de estado de excepción y de conflicto armado [...]. En ningún lugar del mundo se debería permitir que alguien fuese privado de su libertad en secreto, por períodos que pueden ser indefinidos, y quedara fuera del alcance de la ley sin la posibilidad de recurrir a procedimientos judiciales, como el recurso de *habeas corpus* [...]. Al mismo tiempo, la detención secreta equivale a una desaparición forzada. De recurrirse a ella en forma generalizada o sistemática, la detención secreta puede incluso llegar a constituir un crimen de lesa humanidad" (A/HRC/16/47, párr. 54).

22. En lo que respecta al procedimiento seguido, el Grupo de Trabajo observa que los Sres. Mustafa, Saleh y Malla Ahmad fueron detenidos el 26 de diciembre de 2009 y conducidos a un lugar no revelado en violación del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No fueron informados de las acusaciones ni de las razones por las que fueron detenidos, ni fueron llevados ante un juez del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, que tiene una competencia excepcional, hasta el 6 de junio de 2010. Asimismo, se les impidió el acceso libre y sin trabas a su abogado y sus familias, y hasta la fecha no se ha dictado ninguna sentencia. A la luz de la información de que dispone, el Grupo de Trabajo solo puede concluir que se está privando efectivamente a las personas mencionadas de la posibilidad de impugnar su reclusión ante un tribunal independiente e imparcial. No se les han concedido las garantías mínimas consagradas en el derecho a un juicio imparcial, tal y como se reconoce en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otras disposiciones.

23. Por último, el único motivo aparente de su detención y reclusión es su pertenencia al partido de la oposición de la República Árabe Siria. El Grupo de Trabajo recordará al Gobierno que el artículo 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que "toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". Por otro lado, los Sres. Mustafa, Saleh y Malla Ahmad tienen derecho a que se proteja su derecho de reunión pacífica en virtud del artículo 21 del Pacto. El Gobierno no ha aducido ninguna razón válida para restringir los derechos de dichas personas a la libertad de expresión y de reunión con arreglo a las excepciones previstas en el artículo 19, párrafo 3, y en el artículo 21 del Pacto. En cualquier caso, el Gobierno no puede en ninguna circunstancia recurrir a medidas manifiestamente innecesarias y desproporcionadas que pongan en peligro el fundamento mismo de estos derechos. En el presente caso, el hecho de recluirla a los Sres. Mustafa, Saleh y Malla Ahmad en un lugar no revelado y en régimen de incomunicación, de impedirles contactar con su abogado y con sus familias y de no facilitarles información sobre el resultado de su juicio supone una clara violación por el Gobierno de los requisitos de necesidad y proporcionalidad, y socava el fundamento mismo de los derechos que les asisten en virtud de los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Decisión

24. En virtud de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión: la privación de libertad de Mohamed Ahmed Mustafa, Hassan Ibrahim Saleh y Maarouf Ahmad Malla Ahmad es arbitraria. Se inscribe en las categorías II y III aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo, y constituye una violación de los artículos 9, 10, 11 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los artículos 9, 14, 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

25. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de la República Árabe Siria que proceda a la inmediata puesta en libertad de Mohamed Ahmed Mustafa, Hassan Ibrahim Saleh y Maarouf Ahmad Malla Ahmad y les proporcione una reparación adecuada.

[Aprobada el 3 de mayo de 2011.]